

SENTENCIA DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2006, No. 2

Sentencia impugnada: Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, del día 31 de marzo del 2006.

Materia: Correccional.

Recurrentes: Jerileybis González y compartes.

Abogado: Dr. Eneas Núñez Fernández.

Interviniente: Ernesto Suárez Morillo.

Abogados: Dres. Felipe R. Santana R. y Osiris Santana.

LAS CAMARAS REUNIDAS

Casa

Audiencia pública del 6 de septiembre del 2006.

Preside: Jorge A. Subero Isa.

Dios, Patria y Libertad

En Nombre de la República, las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, dicta en audiencia pública, la sentencia siguiente:

Sobre el recurso de casación interpuesto por Jerileybis González, dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral No. 054-0029696-9, domiciliado y residente en la calle Bartolomé Colón No. 27, barrio 24 de abril, imputado; La Sirena, C. por A. y Grupo Ramos, S. A., tercero civilmente demandado, y La Colonial de Seguros, S. A., entidad aseguradora, contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el día 31 de marzo del 2006, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante;

Oído al alguacil de turno en la lectura del rol;

Oído al Dr. Eneas Núñez F., en representación de la parte recurrente, en la lectura de sus conclusiones;

Oído al Dr. Felipe R. Santana R., por sí y por el Dr. Osiris Santana, en representación de la parte interviniente, Ernesto Suárez Morillo, en la lectura de sus conclusiones;

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República;

Visto el escrito del Dr. José Eneas Núñez Fernández, mediante el cual los recurrentes interponen los fundamentos de su recurso de casación, depositado el 2 de mayo del 2006;

Visto el escrito de intervención suscrito por los Dres. Ramón Osiris Santana Rosa y Felipe Radhamés Santana Rosa, en representación de Ernesto Suárez Morillo;

Visto la Resolución Num. 1992-2006 de las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, del 29 de junio del 2006, que declaró admisible el presente recurso de casación;

Visto la Ley Num. 25 de 1991, modificada por la Ley Num. 156 de 1997;

Visto el auto dictado 31 de agosto del 2006, por el Magistrado Jorge A. Subero Isa, presidente de la Suprema Corte de Justicia, mediante el cual llama a los magistrados Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez y Edgar Hernández Mejía, para integrar las Cámaras Reunidas en la deliberación y fallo del recurso de casación de que se trata, de conformidad con la Ley Num. 684 de 1934;

Las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, por tratarse de un segundo recurso de casación sobre el mismo punto, de conformidad con lo que dispone el artículo 15 de la Ley Num. 25-91 del 15 de octubre de 1991, en audiencia pública del 26 de julio del 2006, estando presentes los Jueces: Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente, Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado y, vistos los artículos 24, 393, 399, 418, 419, 425,

426 y 427 del Código Procesal Penal; 65 de Ley sobre Procedimiento de Casación; 2 de la Ley Num. 278-04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley Num. 76-02, después de haber deliberado, los jueces signatarios de este fallo;

Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos a que ella se refiere son hechos constantes los siguientes: **a)** que el 24 de julio del 2002 ocurrió un accidente entre el camión Daihatsu, conducido por Jerileybis González, propiedad de La Sirena, C. por A., y asegurado con La Colonial de Seguros, S. A., y el vehículo, marca Suzuki, conducido por Ernesto Antonio Suárez; **b)** que el 1 de julio del 2004 el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala II, dictó sentencia con motivo del proceso seguido a los recurrentes, cuyo dispositivo aparece copiado más adelante; **c)** que ésta fue recurrida en apelación ante la Duodécima Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional y el 30 de junio del 2005 pronunció la sentencia, cuyo dispositivo es el siguiente: **APRIMERO:** Se declara bueno y válido en cuanto a la forma, el recurso de apelación interpuesto por la Lic. Adalgisa Tejada conjuntamente con el Dr. José Eneas Núñez actuando a nombre y representación de Jerileybis González, Grupo Ramos, C. por A., La Colonial de Seguros, S. A., y la Sirena, C. por A., de fecha 8 de julio del 2004, en contra de la sentencia Num. 762/2004, dictada por el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional Sala II, por haber sido hechos conforme a la ley, cuyo dispositivo es el siguiente: **>Primero:** Ratifica el defecto pronunciado en audiencia pública, el día 25 de junio del 2004, en contra del ciudadano Jerileybis González, conforme al artículo 185 del Código de Procedimiento Criminal por no comparecer no obstante citación legal, acorde con las precisiones de los artículos 7 de la Ley 1014 del 1935 y 180 del indicado código; **Segundo:** Declara al ciudadano Jerileybis González, de generales que constan, culpable de violar las disposiciones contenidas en los artículos 49 literal d, 65 de la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, de fecha 28 de diciembre del 1967, modificada por la Ley 114-99 de fecha 16 de diciembre del 1999, que tipifica el delito de golpes y heridas que ocasionan lesiones permanentes en perjuicio de Ernesto Antonio Suárez Morillo y de los hechos puestos a su cargo, en consecuencia se le condena a pagar una multa de Tres Mil Doscientos Pesos (RD\$3,200.00), en virtud del principio de cúmulo de pena, a favor del Estado Dominicano, acogiendo a su favor circunstancias atenuantes y al pago de las costas penales; **Tercero:** Declara al ciudadano Ernesto Antonio Suárez Morillo, de generales que constan, no culpable de violar ninguna de las disposiciones contenidas en la Ley 241 sobre Tránsito de Vehículos de Motor, de fecha 28 de diciembre del 1967, en consecuencia descarga de toda responsabilidad penal y de los hechos puestos a su cargo, costas de oficio; En cuanto al aspecto civil; **Cuarto:** Examina en cuanto a la forma, como buena y válida la constitución en parte civil incoada por los señores Ernesto Antonio Suárez Morillo y Amauris Fermín Ballenilla, por órgano de sus abogados constituidos y apoderados especiales Dres. Ramón Osiris Santana Rosa y Felipe Radhamés Santana Rosa, por haber sido instituida en observancia a los artículos 3 y 63 del Código de Procedimiento Criminal Dominicano; **Quinto:** Accede, en cuanto al fondo; en parte la presente demanda en daños y perjuicios, en consecuencia condena a la entidad moral La Sirena, C. por A., calidad de persona civilmente responsable, propietaria del vehículo causante del accidente, de manera conjunta y solidaria a la razón social Grupo Ramos, S. A., en su calidad de beneficiario de la póliza aseguradora, al pago de la suma de Trescientos Cincuenta Mil Pesos (RD\$350,000.00), a favor del señor Ernesto Antonio Suárez Morillo, como justo desagravio por la magnitud y gravedad de las lesiones recibidas a propósito del accidente en cuestión; **Sexto:** Rechaza la solicitud de condenación a favor del señor Amaurys Fermín Ballenilla, por no haber demostrado la

acreencia de propietario del vehículo causante del accidente, o por lo menos aludir a un principio de prueba a que refiere el artículo 1347 del Código Civil Dominicano, que hagan verosímiles sus alegatos; **Séptimo:** Condena a las personas morales La Sirena, C. por A. y Grupo Ramos, S. A., en sus expresadas calidades al pago de un dos por cientos (2%) por concepto de intereses legales, contados a partir de la demanda en justicia de fecha 16 de enero del 2003; **Octavo:** Condena a las personas morales La Sirena, C. por A. y Grupo Ramos, S. A., en sus manifiestas calidades al pago de las costas del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho de los doctores Ramón Osiris Santana Rosa y Felipe Radhamés Santana Rosa, quienes afirman haberlas avanzando en su mayor parte; **Noveno:** Declara la presente sentencia común y oponible a la entidad moral La Colonial de Seguros, por ser la entidad aseguradora del vehículo causante del accidente hasta el limite de la póliza Num. 1-500-109601, con vigencia desde el día 31 de marzo del 2003, expedida a favor de la entidad moral Grupo Ramos, S. A. =; **SEGUNDO:** En cuanto al fondo del presente recurso de apelación este tribunal actuando por autoridad propia modifica los ordinales Quinto y Séptimo de la sentencia recurrida y en consecuencia condena a la Sirena, C. por A., al pago de una indemnización de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos (RD\$275,000.00), a favor del señor Ernesto Antonio Suárez Morillo y declara la nulidad de lo dispuesto en el ordinal séptimo de la sentencia recurrida relativo a la condenación accesorio del pago de un dos por ciento (2%) por concepto de intereses legales, contados a partir de la demanda en justicia de fecha 16 de enero del 2003; **TERCERO:** Condena a las personas morales La Sirena, C. por A. y Grupo Ramos, S. A., en sus expresadas calidades al pago de un uno por ciento (1%) por concepto de intereses legales, contados a partir de la demanda en justicia de fecha 16 de enero del 2004; **CUARTO:** Confirma los demás aspectos de la sentencia recurrida por ser justa y reposar sobre base legal; **QUINTO:** Condena a la parte sucumbiente en el presente recurso Ernesto Antonio Suárez Morillo y Amauris Fermín Ballenilla al pago de las costas civiles del procedimiento y ordena su distracción a favor y provecho del abogado concluyente Dr. Eneas Núñez, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad@; **d)** que recurrida en casación, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró con lugar el recurso y envió el asunto ante la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, la cual sentencia de fondo, el 31 de marzo del 2006, cuyo dispositivo es el siguiente: **APRIMERO:** Declara el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Licda. Adalgisa Tejada, por sí y por el Dr. José Eneas Núñez, actuando a nombre y representación de Jerysleibis González, La Sirena, C. por A., Grupo Ramos, S. A., y La Colonial de Seguros, S. A., el 8 de julio del 2004, contra la sentencia marcada con el Num. 762-2004 del 1ro. de julio del 2004 el Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, Sala 2, por falta de interés de los recurrentes@; **e)** que recurrida en casación la referida sentencia por Jerileybis González, La Sirena, C. por A., Grupo Ramos, S. A. y La Colonial de Seguros, S. A., las Cámaras Reunidas emitió en fecha 29 de junio del 2006 la Resolución Num. 1992-2006, mediante la cual declaró admisible dicho recurso y al mismo tiempo se fijó la audiencia para el 26 de julio del 2006 y conocida ese mismo día; Considerando, que en su escrito los recurrentes proponen, en apoyo a su recurso de casación, en síntesis lo siguiente: **A** Violación al artículo 8 letra J de la Constitución de la República; Violación del artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; Violación de los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Ley Num. 278-04 sobre Implementación sobre el Código Procesal Penal; Violación artículos 398, 400 y 422 del Código Procesal Penal. Que la parte recurrente solicitó al tribunal de envío que se desapoderara del expediente para que el mismo fuera enviado a un tribunal liquidador, lo cual fue rechazado, lo que coloca a las

partes recurrentes en un estado de indefensión violando el derecho de defensa de éstos, pues el recurso de apelación fue interpuesto de conformidad con el sistema del Código de Procedimiento Criminal que carecía de motivaciones@;

Considerando, que consta en la sentencia impugnada que la Juzgado a-quo, dijo haber dado por establecido lo siguiente: Aa) Que resulta una falta de interés del recurrente el hecho de abandonar los estrados, el Dr. Alejandro Estévez, por sí y por el Dr. José Núñez Hernández, en representación de Jerileybis González; y por otro lado también resulta una falta de interés de La Sirena, C. por A., Grupo Ramos, C. por A., y La Colonial de Seguros, S. A., el hecho de no encontrarse representado ni asistir a la audiencia, no obstante encontrarse legalmente citados; b) Que no obstante haberse fijado la audiencia y haberse puesto en marcha todo el sistema judicial al servicio de los recurrentes, luego de ser tramitado el proceso ante el tribunal de alzada para que el proceso del recurso llegue a su finalidad última, el de debatir en audiencia los motivos de su recurso, dicha finalidad se ha visto interrumpida en razón del desistimiento por falta de interés; c) Que el abogado del recurrente fue debidamente notificado para la audiencia para el conocimiento del recurso, desistiendo de la misma, sin presentar ante esta Sala una justa causa, quedando evidenciado que la acción que impulsaba el proceso cesó por carecer de la justificación e interés que pueda deducirse de la apelación. Que en todo sistema de justicia, más en el caso nuestro en donde se ha instaurado la justicia rogada, la máxima o aforismo francés *Apoinet d'interet, point d'accion@* (donde no hay interés no hay acción) alcanza su mayor connotación; por lo que la falta de interés del recurrente y su incomparecencia injustificada deben ser sancionadas con la declaratoria de desistimiento a su recurso; d) Que el Ministerio Público ha presentado conclusiones en el sentido de que se adhiere al pedimento del actor civil, en cuanto a que se levante el acto de desistimiento y que condena al imputado Jerileybis González, Tienda La Sirena, C. por A, en calidad de persona civilmente responsable, Grupo Ramos, S. A. y la compañía La Colonial de Seguros, S. A., al pago de las costas del procedimiento@;

Considerando, que el artículo 100 del Código Procesal Penal, dispone que cuando el imputado no comparece a una citación sin justificación, como en el presente caso, o se fugare del establecimiento donde está detenido o se ausentara de su domicilio real con el fin de sustraerse al procedimiento, el ministerio público puede solicitar al juez o tribunal que lo declare en rebeldía y que dicte orden de arresto;

Considerando, que por otra parte el artículo 128 del Código Procesal Penal establece que, la incomparecencia del tercero civilmente demandado, no suspende el procedimiento. En este caso, se continúa como si él estuviera presente;

Considerando, que por lo demás, el artículo 398 del Código Procesal Penal dispone que, **ALas** partes o sus representantes pueden desistir de los recursos interpuestos por ellas sin perjudicar a los demás recurrentes, pero tienen a su cargo las costas. El defensor no puede desistir del recurso sin autorización expresa y escrita del imputado@;

Considerando, que no se pudo interpretar la no comparecencia de las partes como un desistimiento del recurso interpuesto, y que en el caso de la especie el Juzgado a-quo debió decidir de conformidad con las previsiones de los artículos 100, 128 y 398 del Código Procesal Penal. Por lo que al declarar el desistimiento del recurso del imputado, tercero civilmente demandado y de la entidad aseguradora, alegando falta de interés por incomparecencia, el Juzgado a-quo no se ajustó a las condiciones establecidas en los artículos precitados;

Considerando, que cuando una sentencia es casada por violaciones a las reglas cuya observancia esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas;

Por tales motivos, **Primero:** Admite como interviniente a Ernesto Suárez Morillo en el recurso de casación interpuesto por Jerileybis González, La Sirena, C. por A., Grupo Ramos, S. A., y La Colonial de Seguros, S. A., contra la sentencia dictada por la Primera Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional el 31 de marzo del 2006, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo; **Segundo:** Declara con lugar el referido recurso y envía el asunto por ante la Segunda Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional; **Tercero:** Compensa las costas. Así ha sido hecho y juzgado por las Cámaras Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, y la sentencia pronunciada por las mismas, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, en su audiencia del 6 de septiembre del 2006, años 1631 de la Independencia y 1441 de la Restauración.

Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglis Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en el expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.suprema.gov.do